

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA, POR LA QUE SE HACEN PÚBLICOS LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE.

Por acuerdos de los Plenos del Ayuntamiento de Garray y de la Diputación Provincial de Soria, en sesiones celebradas los días 31 de marzo y 6 de abril de 2006, respectivamente, así como por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en sesión celebrada el día 20 de abril de 2006, se han aprobado los Estatutos del Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Gestión de la Ciudad del Medio Ambiente.

Por ello procede su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia”. A estos efectos, se reproduce en el anexo de esta resolución el texto de los mencionados Estatutos.

Soria, a 4 de mayo de 2006

EL PRESIDENTE

Fdo.: Efrén Martínez Izquierdo.

ANEXO

ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE

Preámbulo

La Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Garray, tienen la firme voluntad de impulsar el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente en la Provincia de Soria. Este proyecto tiene por objetivo la creación de un espacio en la que se integren áreas destinadas a albergar instituciones dedicadas a la investigación y el desarrollo, particularmente, en el campo de la preservación del medio ambiente, usos residenciales y actividades empresariales y de servicios, pero siempre desde la perspectiva de la máxima integración en el entorno y de la sostenibilidad del desarrollo económico. Así concebido el Proyecto, la Ciudad del Medio Ambiente constituiría un modelo pionero y sin precedentes en el territorio nacional, de utilización de la más innovadora tecnología para la creación de un núcleo urbano respetuoso con el medio ambiente.

Para ello, la Junta de Castilla y León prevé planificar el desarrollo de la Ciudad del Medio Ambiente a través de un Plan Regional de ámbito territorial de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. La importancia del proyecto y la necesidad de la actuación conjunta de las distintas Administraciones Públicas intervinientes justifica la necesidad de constituir una organización institucional común que permita una gestión eficaz del proyecto y una adecuada coordinación de las actuaciones que se prevean.

Así, y de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Garray, para la Promoción, Desarrollo y Gestión de la Ciudad del Medio Ambiente, se ha optado por la constitución de un Consorcio para la promoción, construcción,

desarrollo y gestión de la Ciudad del Medio Ambiente, así como para la vigilancia y garantía del cumplimiento de los fines del proyecto.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.– Constitución del Consorcio.

Al amparo de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Decreto 22/2004, de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en el artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se constituye un Consorcio por la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamientos de Garray, que tendrán la condición de entidades fundadoras.

Constituido el Consorcio y, a través del procedimiento establecido en los presentes Estatutos, podrán incorporarse al mismo otras entidades representativas de los ámbitos sociales, económicos y culturales de la Comunidad de Castilla y León y del Estado.

Artículo 2. – Denominación.

El Consorcio que se constituye recibirá la denominación de «Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Gestión de la Ciudad del Medio Ambiente».

Artículo 3. – Naturaleza y personalidad jurídica.

El Consorcio regulado en estos Estatutos se establece con carácter voluntario y se configura como una entidad con personalidad jurídico-pública, de carácter asociativo, dotada de personalidad jurídica propia e independiente de la de las entidades consorciadas.

Queda configurado, de esta forma, como una entidad instrumental de las Administraciones Públicas consorciadas para la mejor gestión de los fines de interés público que concurren en las actuaciones de promoción, construcción, desarrollo, gestión y mantenimiento de la Ciudad del Medio Ambiente.

Artículo 4. – Régimen jurídico.

El Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Gestión de la Ciudad del Medio Ambiente, se rige por lo dispuesto en los presentes Estatutos, en la reglamentación interna dictada en desarrollo de los mismos y por las disposiciones legales de carácter general que sean de aplicación.

Artículo 5.– Domicilio.

El Consorcio tendrá su sede en la Diputación Provincial de Soria, que se considerará como domicilio a todos los efectos legales. No obstante, la Asamblea General o la Comisión Ejecutiva del Consorcio, podrán acordar la celebración de sus sesiones en cualquiera de los locales oficiales de las entidades consorciadas.

En caso de que las circunstancias lo aconsejen, y mediante acuerdo de la Asamblea General, podrá modificarse la sede del Consorcio.

Artículo 6. – Duración.

El Consorcio se constituye con carácter indefinido sin perjuicio de la posibilidad de acordar su disolución con arreglo a lo dispuesto en los presentes Estatutos.

Artículo 7. – Objeto y fines del Consorcio.

Serán fines del Consorcio la realización de todas aquellas actividades que resulten precisas para la promoción, construcción, desarrollo, gestión y mantenimiento de la Ciudad del Medio Ambiente y, en concreto:

a) La adquisición, tenencia, enajenación, constitución, modificación, extinción, administración y disposición sobre toda clase de derechos sobre bienes muebles e

inmuebles, por cualquier título, pudiendo, en su caso, ser beneficiario en procedimientos de expropiación;

b) La elaboración, seguimiento y ejecución de planes, estudios, proyectos o instrumentos urbanísticos de todo tipo, en desarrollo y ejecución del planeamiento y, en particular, la ejecución de las determinaciones contenidas en el Plan Regional de ámbito territorial, y en los demás instrumentos que pudieran aprobarse en desarrollo del mismo.

c) La promoción de la preparación del suelo, su urbanización, y la renovación, rehabilitación y remodelación urbana, así como la realización de obras de urbanización, edificación, infraestructura y dotación de servicios de todo tipo;

d) La gestión, mantenimiento y conservación de las actuaciones realizadas hasta que sean formalmente recepcionadas por las Administraciones urbanísticas competentes;

e) El diseño y ejecución de campañas para la promoción del proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente;

f) Programar y solicitar a las distintas Administraciones, Organismos Públicos y Entidades Privadas el desarrollo de políticas y actuaciones que coadyuven a la ejecución del proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente;

g) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Ciudad del Medio Ambiente adoptando para ello cuantas medidas sean necesarias en relación con los partícipes en el proyecto o con terceros;

h) La prestación de cuantos servicios, estudios, asesoramientos y asistencias técnicas fueren precisos para el cumplimiento de los fines perseguidos;

i) Cualquier otra actividad que directa o indirectamente contribuya al fomento, promoción y gestión de la Ciudad del Medio Ambiente;

Artículo 8.– Capacidad y potestades administrativas.

Para el cumplimiento de sus fines, el Consorcio ostenta capacidad jurídica plena para adquirir, poseer, permutar, reivindicar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, obligarse, interponer los recursos pertinentes y ejercitar cuantas acciones sean precisas en Derecho y, en general, concertar cuantos negocios

jurídicos sean pertinentes al cumplimiento de sus fines, sin más limitaciones que las previstas en la legislación vigente.

El Consorcio podrá ejercitar, con las condiciones y límites impuestos por la legislación local y autonómica, las potestades que pudieran ser necesarias para el cumplimiento de sus fines.

El Consorcio podrá, asimismo, para el cumplimiento de sus fines, utilizar cualquiera de las formas de gestión de los servicios públicos previstas en la legislación local, autonómica, y estatal.

Artículo 9.– Regulación de los servicios.

El Consorcio regulará reglamentariamente el régimen interno y de funcionamiento de sus propios servicios adoptando al efecto los reglamentos precisos con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en los presentes Estatutos y en la normativa que pudiera resultar de aplicación.

Artículo 10. – Incorporación de nuevas entidades y separación de miembros.

Para la incorporación de nuevos miembros al Consorcio, se requerirá la modificación de los Estatutos con sujeción a los requisitos previstos en el artículo 20. En todo caso, las entidades interesadas en incorporarse al Consorcio habrán de presentar previamente la correspondiente petición, en la que conste la aceptación íntegra de los Estatutos modificados del Consorcio, los compromisos de ellos derivados, así como las demás condiciones que pudiera acordar la Asamblea General.

La separación del Consorcio podrá producirse a petición de la parte interesada, o como sanción por el incumplimiento de sus obligaciones que deberá ser aprobada por la Asamblea General con sujeción a lo dispuesto en el artículo 20 de los presentes Estatutos. En todo caso, y previamente, se procederá a la liquidación de los compromisos y obligaciones correspondientes, así como a la depuración de las posibles responsabilidades a que hubiere lugar.

En caso de separación, la misma surtirá efectos al finalizar el ejercicio económico en que se hubiere adoptado el correspondiente acuerdo de separación. Dicha separación implicará la posterior modificación de los Estatutos para su adaptación a las nuevas circunstancias.

Artículo 11. – Modificación de los Estatutos

La modificación de estos Estatutos, previo acuerdo de la Asamblea General con el quórum establecido al efecto, habrá de ser aprobada por las entidades consorciadas, con las mismas formalidades seguidas para la aprobación de aquéllos.

CAPÍTULO II Régimen Orgánico

Artículo 12.– Órganos de Gobierno.

Los órganos de gobierno del Consorcio son los siguientes:

- a) La Asamblea General.
- b) La Comisión Ejecutiva.
- c) El Presidente y el Vicepresidente.

Artículo 13.– La Asamblea General.

1. La Asamblea General estará constituida por los miembros siguientes:

- A) Representantes de las entidades fundadoras:
 - a) El Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en su calidad de Presidente del Consorcio, o persona en quien delegue.
 - b) El Presidente de la Diputación Provincial de Soria, en su calidad de Vicepresidente del Consorcio, o persona en quien delegue.
 - c) El Alcalde de Garray o Concejal en quien delegue.
 - d) Tres representantes de la Junta de Castilla y León designados por el órgano competente.

e) Un Concejales del Ayuntamiento de Garray, designado por el Pleno de la Corporación Municipal.

f) Un Diputado provincial, designado por el Pleno de la Diputación Provincial de Soria.

B) Representantes de las entidades no fundadoras:

En el caso de que, con posterioridad a su fundación, se incorporen al Consorcio nuevas entidades, la Asamblea General determinará previamente, mediante la adopción del correspondiente acuerdo de modificación de los Estatutos, en los términos previstos en el artículo 10, los representantes que correspondan tras las nuevas incorporaciones en los órganos de gobierno del Consorcio a cada una de las entidades consorciadas.

2. Todos los miembros de la Asamblea General tendrán derecho a voz y voto, decidiendo el Presidente los empates con voto de calidad.

Artículo 14.– La Comisión Ejecutiva.

La Comisión Ejecutiva estará integrada por los siguientes miembros:

- a) El Presidente del Consorcio o persona en quien delegue, que la presidirá.
- b) El Vicepresidente del Consorcio o persona en quien delegue.
- c) Dos miembros, elegidos por la Asamblea General de entre los miembros de ésta última, uno en representación de la Junta de Castilla y León y otro en representación del Ayuntamiento de Garray.

El personal del Consorcio podrá asistir a las sesiones, con voz y sin voto, si es requerido para ello por el Presidente cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconseje.

Artículo 15.– Competencias de la Asamblea General.

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y administración del Consorcio. Corresponden a la Asamblea General las siguientes atribuciones:

a) Su constitución, así como la designación de miembros de la Comisión Ejecutiva, conforme a lo establecido en el presente Estatuto.

b) La aprobación del Programa General a desarrollar por el Consorcio en cada ejercicio, así como la aprobación y modificación del presupuesto general anual.

c) La aprobación de la Memoria anual, que se deberá remitir a los miembros del Consorcio.

d) La aprobación y censura de la Cuenta General y la disposición de gastos de su competencia.

e) La aprobación de la plantilla presupuestaria y relación de puestos de trabajo, así como la cuantía global de las retribuciones del personal del Consorcio.

f) La aprobación de la modificación de los Estatutos y la aprobación de la incorporación de nuevas entidades, así como de la separación de miembros del Consorcio cuando no sea voluntaria, en los términos previstos en el artículo 10.

g) La aprobación de los Reglamentos de Régimen Interior y del Servicio del Consorcio.

h) La contratación de obras, gestión de los servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia y servicios o cualquier otro que exija créditos superiores al consignado en el presupuesto anual o su duración sea superior a cuatro años.

i) La aprobación de los proyectos de obras y de gestión de servicios, así como del correspondiente gasto, dentro de los límites de su competencia para contratar.

j) La adquisición y enajenación de bienes inmuebles cuando el importe de transmisión exceda, impuestos excluidos, del 10% del presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio en el que se perfeccione la misma.

k) La aprobación de los conciertos y convenios para la prestación de servicios con entidades públicas o privadas y los acuerdos de colaboración que se puedan establecer, cuando no figuren incluidos en el programa a que se refiere el apartado b) anterior.

l) El acuerdo relativo a la disolución del Consorcio y su liquidación.

Artículo 16.– Competencias de la Comisión Ejecutiva.

Son atribuciones de la Comisión Ejecutiva las siguientes:

a) Informar el proyecto de presupuesto anual del ejercicio y la plantilla de personal.

b) La organización de los servicios técnicos y administrativos.

c) La contratación de obras, gestión de servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia y servicios o cualquier otro que no exija créditos superiores al consignado en el Presupuesto anual o cuya duración no sea superior a cuatro años siempre que no sean competencia de la Asamblea General o del Presidente.

d) La adquisición y enajenación de bienes inmuebles cuando el importe de transmisión no exceda, impuestos excluidos, del 10% del presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio en el que se perfeccione la misma.

e) El reconocimiento de todo tipo de obligaciones económicas.

f) El ejercicio de toda clase de acciones judiciales o administrativas y la adopción de acuerdos para personarse y oponerse en los litigios en que intervenga el Consorcio, debiendo dar cuenta a la Asamblea General en la primera sesión que celebre.

g) Ejercer las funciones disciplinarias, sometiéndose para ello a la normativa que resulte de aplicación.

h) Informar los proyectos de Reglamentos de Régimen Interior y del Servicio.

i) Aprobación de los proyectos de obras y de gestión de servicios, así como del correspondiente gasto, dentro de los límites de su competencia para contratar.

j) Las operaciones de crédito que no sean competencia de la Asamblea General.

k) Las atribuciones que le sean delegadas por la Asamblea General, no siendo delegable la adopción de acuerdos sobre materias que precisen del voto favorable de la mayoría absoluta.

l) Aprobar los conciertos y convenios para la prestación de servicios con entidades públicas o privadas y los acuerdos de colaboración que se puedan establecer, cuando figuren incluidos en el programa a que se refiere el apartado b) del Art. 15 de los presentes Estatutos.

m) El nombramiento y separación del Secretario General, Interventor, Gerente y otros cargos directivos.

n) Las funciones no atribuidas expresamente a otros órganos de la Entidad.

Artículo 17.– Competencia del Presidente del Consorcio.

Serán atribuciones propias del Presidente las siguientes:

- a) Ostentar la representación legal del Consorcio a todos los efectos.
- b) Formar el orden del día, convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones, así como dirigir las deliberaciones de los órganos colegiados del Consorcio.
- c) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea General y de la Comisión Ejecutiva.
- d) Dirimir, con su voto de calidad, los empates que puedan darse en la Asamblea General o la Comisión Ejecutiva para adoptar acuerdos.
- e) Ordenar pagos.
- f) Delegar funciones en la Vicepresidencia o en el Gerente.
- g) Apercibir al personal dependiente del Consorcio, sin necesidad de procedimiento especial.
- h) Adopción de medidas en caso de urgencia, calamidad o siniestro, que pudieran ser competencia de los órganos colegiados, dando cuenta a éstos en la primera sesión a celebrar, incluso el ejercicio de acciones judiciales o administrativas de cualquier índole y la defensa en los procedimientos incoados contra el Consorcio.
- i) La contratación de obras, gestión de los servicios públicos, suministros, consultoría y asistencia y servicios que, según el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, puedan calificarse de contratos menores.
- j) El nombramiento y cese del personal no atribuido a otros órganos.
- k) Aquellas otras competencias que puedan delegarle la Asamblea General o la Comisión Ejecutiva.

En el ejercicio de sus funciones, el Presidente será asistido por el Secretario General en los términos previstos en el artículo 31.

CAPÍTULO III

Régimen Funcional de la Asamblea y de la Comisión Ejecutiva

SECCIÓN 1.^a

Sesiones de la Asamblea General y de la Comisión Ejecutiva

Artículo 18.– Sesiones y sus clases.

Los órganos colegiados del Consorcio se reunirán en sesiones de carácter ordinario o extraordinario, conforme lo establecido en los presentes Estatutos.

Artículo 19.– Sesiones de la Asamblea General.

Las sesiones ordinarias de la Asamblea General se celebrarán, al menos, dos veces al año. La primera, que deberá celebrarse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, tendrá por objeto censurar las gestiones y el cumplimiento del Programa General del Consorcio, aprobar las cuentas y balances del ejercicio anterior y resolver sobre cualquier propuesta que se someta a su consideración. En la segunda, que deberá celebrarse antes de que finalice cada ejercicio, se aprobarán los presupuestos y el Programa General del Consorcio del siguiente. Se convocará sesión extraordinaria siempre que lo considere necesario el Presidente o que, al menos, lo solicite la tercera parte de los miembros de la Asamblea General.

Las sesiones ordinarias se convocarán con una antelación mínima de cinco días hábiles y las extraordinarias con antelación mínima de tres días hábiles.

Para la celebración de las sesiones en primera convocatoria, será necesaria la asistencia de la mayoría absoluta del número de miembros de la Asamblea General. Si en el día y la hora previstos en la convocatoria, no concurrieran la mayoría absoluta, quedarán automáticamente convocados, una hora después a la indicada para la primera convocatoria, bastando, para la celebración de la sesión, la asistencia de, al menos, un tercio de los miembros de la Asamblea General.

Artículo 20.– Adopción de Acuerdos por la Asamblea General.

1. La Asamblea General adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los miembros presentes o representados.

2. No obstante lo anterior, será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número de miembros que integran la Asamblea General para la adopción de los siguientes acuerdos:

a) La designación de los vocales de la Comisión Ejecutiva.

b) La incorporación de nuevos miembros al Consorcio y la determinación de los representantes que correspondan en los órganos colegiados del Consorcio a los miembros, como consecuencia de la nueva incorporación, así como la separación de algún miembro del Consorcio.

c) La modificación de los presentes Estatutos.

d) La disolución del Consorcio.

e) Los que, de forma especial, se señalen en estos Estatutos.

f) Aquellos otros asuntos para los que la normativa aplicable exija quórum especial.

3. Serán válidos los acuerdos adoptados por la Asamblea General con la presencia de todos sus miembros aunque no se haya efectuado previa convocatoria siempre que ninguno de los componentes se oponga a la celebración de la sesión.

Artículo 21.– Sesiones de la Comisión Ejecutiva.

1. El número, días y horas de las sesiones ordinarias que celebre la Comisión Ejecutiva serán las que ella misma determine al constituirse; las sesiones extraordinarias se convocarán por la Presidencia, siempre que los asuntos lo requieran, o cuando lo soliciten, al menos, la mitad de los miembros de la misma.

2. Las sesiones ordinarias se convocarán con un mínimo de cinco días hábiles de antelación y las extraordinarias con una antelación mínima de tres días hábiles.

3. Para la celebración de las sesiones en primera convocatoria, será necesaria la asistencia de la mayoría absoluta del número de miembros de la Comisión Ejecutiva. Si en el día y la hora previstos en la convocatoria, no concurrieran la mayoría absoluta, quedarán automáticamente convocados, una hora después a la indicada para la primera convocatoria, bastando, para la celebración de la sesión, la asistencia de, al menos, un tercio de los miembros de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 22.– Adopción de Acuerdos por la Comisión Ejecutiva.

1. Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva se adoptarán por mayoría simple de los asistentes.

2. Serán válidos los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva con la presencia de todos sus miembros aunque no se haya efectuado previa convocatoria siempre que ninguno de sus componentes se oponga a la celebración de la sesión.

Artículo 23.– Obligatoriedad de asistencia.

1. La asistencia a las sesiones de la Asamblea General y la Comisión Ejecutiva será un derecho y un deber de los miembros. En todo caso, será imprescindible la asistencia del Presidente y del Secretario General.

2. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de un miembro del Consorcio, podrá ser suplido por la persona que designe el órgano competente para el nombramiento de aquél.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, si alguno de los miembros de la Asamblea General o la Comisión Ejecutiva no puede asistir a sus sesiones por causa justificada podrá hacer expresa delegación de voto en cualquier otro miembro con derecho a voto.

SECCIÓN 2.^a

Disposiciones comunes para la celebración de las sesiones de la Asamblea
General y de la
Comisión Ejecutiva

Artículo 24.– Orden del día.

La convocatoria de las sesiones contendrá siempre el correspondiente orden del día, comprensivo de los asuntos que se hayan de tratar.

En las sesiones extraordinarias no podrán tratarse otros asuntos que los específicamente señalados en el orden del día. En las sesiones ordinarias podrán declararse asuntos de urgencia, no incluidos en la convocatoria, a propuesta de la Presidencia o por solicitud de cualquier miembro del órgano de gobierno, siempre que la urgencia sea aceptada por el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que integren el órgano colegiado correspondiente.

Artículo 25.– Documentos a disposición de los miembros de los órganos de gobierno.

A partir de la convocatoria de la sesión, se tendrán a disposición de los miembros del órgano de gobierno los expedientes y antecedentes que se vayan a estudiar en las sesiones, que deberán estar bajo custodia del Secretario General.

Artículo 26.– Dirección de las sesiones.

Corresponderá al Presidente la dirección de las sesiones en la siguiente forma:

- a) Preparar el Orden del día, asistido por el Secretario General.
- b) Declarar abierto el acto de la sesión y ordenar los debates que puedan producirse, para lo cual se concederá el uso de la palabra y establecerá los turnos de intervención, pudiendo concederla o retirarla en caso de considerar inoportuna la intervención.
- c) Podrá suspender la sesión por un período de tiempo necesario para el estudio de un asunto o para descanso de los componentes del Órgano.

d) Podrá declarar suficientemente debatido el asunto precisando los términos en que haya quedado planteada la cuestión debatida, al objeto de someterla a votación.

e) Solicitar, a propia voluntad o a petición de alguno de los miembros que asisten al acto, la comparecencia del Interventor o del resto del personal técnico del Consorcio.

Artículo 27.– Tratamiento de los asuntos.

El Secretario General dará cuenta de los asuntos comprendidos en el Orden del día, con lectura de la propuesta de acuerdo, si la hubiere, que podrá formularse de forma extractada y, si nadie pidiera la palabra, el asunto se someterá directamente a votación.

A solicitud de cualquiera de los miembros, se dará lectura de aquella parte especial del expediente o documento necesario para la mejor comprensión del asunto. Si alguno de los miembros necesitase hacer uso de la palabra para explicar la propuesta presentada, podrá hacerlo.

Los miembros asistentes podrán solicitar la retirada de algún expediente incluido en el Orden del día, a los efectos de que se incorporen al mismo los documentos o informes que se consideren necesarios. De igual forma, podrá solicitarse que un expediente quede sobre la Mesa hasta nueva sesión. En ambos casos se someterá la petición a votación, requiriéndose, para ser aceptada, el voto favorable de la mayoría simple.

Artículo 28.– Votaciones.

1. Las votaciones podrán ser ordinarias, nominales o secretas y, en estas últimas, el voto se emitirá por escrito. Se entenderá que existe mayoría simple cuando los votos afirmativos superen a los votos negativos. Los miembros de los órganos colegiados podrán abstenerse de votar.

2. La votación se efectuará normalmente a mano alzada, a indicación del Presidente, pronunciándose, en primer lugar, los votos a favor, seguidamente los votos en contra, y, por último, las abstenciones.

3. El voto del Presidente dirimirá los empates tanto en la Asamblea General como en la Comisión Ejecutiva.

En caso de duda sobre el resultado de la votación, podrá optarse por su repetición.

CAPÍTULO IV

Del Personal

Artículo 29.– Clasificación de personal.

El personal del Consorcio estará constituido por el Gerente, el Secretario General, el Interventor y el restante personal laboral que, en su caso, se contrate

Artículo 30.– El Gerente y sus funciones.

El Gerente del Consorcio será designado por Comisión Ejecutiva. El cargo de Gerente tendrá carácter directivo, estará sometido a la legislación laboral y le corresponderá el salario que se fije en el Presupuesto Anual del Consorcio.

Serán funciones del Gerente las siguientes:

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de los órganos del Consorcio, sin perjuicio de las facultades asignadas al Presidente.

b) Dirigir e inspeccionar las actividades y los servicios que realice el Consorcio, de acuerdo con las directrices marcadas por sus órganos de gobierno.

c) Elaborar el proyecto de Presupuesto Anual, que será elevado a la Asamblea General por el Presidente.

d) Formular al Presidente las propuestas que crea oportunas para el mejor cumplimiento de las finalidades del Consorcio.

e) Desarrollo de la gestión económica, conforme al Presupuesto Anual y a sus bases de ejecución, así como la ordenación de pagos, si el Presidente se lo delegare.

f) Las funciones de tesorería y recaudación.

g) Cualesquiera otras que, sin poseer carácter resolutorio, le sean encomendadas por los órganos de gobierno del Consorcio.

Artículo 31.– Del Secretario General.

El Secretario del Consorcio será designado por Comisión Ejecutiva, teniendo las siguientes funciones:

a) Fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) Comunicar la convocatoria y orden del día de las sesiones del Consorcio según las órdenes del Presidente.

c) Asistir a las reuniones del Consorcio con voz y sin voto.

d) Redactar y firmar las actas de las sesiones, así como expedir certificaciones de los acuerdos.

e) Custodiar las actas del Consorcio.

f) En el caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular ejercerá las funciones de Secretario una persona con la idoneidad suficiente designada por el Presidente.

Artículo 32.– Del Interventor.

El Interventor del Consorcio será designado por la Comisión Ejecutiva, teniendo las siguientes funciones:

a) Control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria.

b) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 33.– Otro personal.

El resto del personal que precise el Consorcio estará sometido al régimen de Derecho laboral.

El número de puestos de trabajo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos serán las que determinen en la relación de puestos de trabajo. La selección de este personal se ajustará a lo que establezca la Comisión Ejecutiva respetando, en todo caso, los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad.

CAPÍTULO V

Régimen jurídico y económico del Consorcio

Artículo 34.– Patrimonio del Consorcio.

El Consorcio, como entidad dotada de personalidad jurídica, será titular de su propio patrimonio que se integrará por los bienes que se aporten por las entidades fundadoras y los que adquiera después de su constitución por cualquier título, pudiendo, en consecuencia, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes.

No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes aportados por las entidades que lo compongan atribuidos al mismo mediante un título distinto del de propiedad.

La enajenación de parcelas o de cualquier otro bien inmueble como consecuencia de la actividad del Consorcio para la implantación de la Ciudad del Medio Ambiente se realizará con sujeción a la legislación urbanística vigente.

Artículo 35. – Régimen de contratación.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Novena, apartado quinto, del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el

Consortio para la Promoción, Desarrollo y Gestión de la Ciudad del Medio Ambiente, adjudicará sus contratos conforme a lo dispuesto en dicho Texto Refundido.

Artículo 36.– Derechos económicos del Consorcio.

1. Son derechos económicos del Consorcio, entre otros, los siguientes:

a) Los productos, rentas o incrementos de los bienes y derechos que integran su patrimonio, así como los ingresos procedentes de su enajenación o gravamen.

b) Los ingresos y derechos que le correspondan por la prestación de servicios o la realización de actividades incluidas en sus fines.

c) Los procedentes de operaciones de crédito.

d) Las aportaciones que deberán efectuar los Entes consorciados para financiar los gastos del Consorcio. Estas aportaciones serán fijadas por la Asamblea General en el momento de la aprobación del presupuesto anual e ingresadas en la cuantía que se fije.

e) Las aportaciones extraordinarias que puedan realizar los Entes consorciados, o cualquier otra entidad pública o privada, ya sea en metálico, en bienes, en maquinaria o de cualquier otro tipo, para la financiación de gastos de inversión.

f) Las subvenciones, aportaciones y donaciones que se concedan a su favor, procedentes de otras Administraciones Públicas, entes públicos, así como de particulares.

2. Las Administraciones consorciadas se comprometen a financiar el mantenimiento del Consorcio para el cumplimiento de sus fines, en atención a la participación que cada una pudiera ostentar, así como a colaborar con el mismo en el desempeño de sus funciones.

3. El Presidente, previos los informes pertinentes, formará dentro del cuarto trimestre de cada año el proyecto de presupuesto anual que someterá a la aprobación de la Asamblea General.

4. La aprobación del presupuesto anual será elevada a las Administraciones Consorciadas a efectos de su ratificación y de la inclusión en sus respectivos presupuestos de las aportaciones que hubieran de destinar al Consorcio.

5. La liquidación del presupuesto anual, modificaciones de créditos, ordenación de gastos y pagos, formalización de ingresos y gastos, rendición de cuentas y la gestión económica en general se realizarán de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

6. Los fondos del Consorcio se ingresarán en una cuenta abierta que la Comisión Ejecutiva designará y de la que dispondrá, previa a la oportuna ordenación de gastos y pagos, mediante talones firmados indistintamente por el Presidente, el Interventor y el Gerente.

7. En el supuesto de que algún Ente consorciado se separara del Consorcio antes de la finalización del ejercicio presupuestario anual, la misma surtirá efectos a partir del primer día del ejercicio económico siguiente, por lo que continuará obligado al pago de su aportación correspondiente hasta el último día del ejercicio económico presupuestario en que se haya acordado la separación.

Artículo 37.– Autorización y compromiso de gastos.

La autorización y compromiso de cada gasto se realizará con arreglo a los límites que a continuación se indican:

a) Hasta el 5% del presupuesto anual, podrán ser autorizados por el Presidente del Consorcio.

b) Desde el 5% hasta el 35% del presupuesto anual, corresponderá su autorización a la Comisión Ejecutiva.

c) Los gastos que superen el 35% del presupuesto anual deberán autorizarse por la Asamblea General del Consorcio.

Artículo 38. – Régimen de impugnación de los actos.

Los actos del Consorcio están sujetos al derecho administrativo y se impugnarán ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 39. – Disolución del Consorcio.

1. El Consorcio podrá disolverse:

- Por acuerdo de todas las entidades consorciadas que lo integran, ya sea por el cumplimiento de sus objetivos o con carácter previo a dicho momento.
- Por imposibilidad legal o material de cumplir sus objetivos.
- Por cualquier otra causa prevista en las leyes.

2. En el acuerdo de disolución se determinará la forma de proceder a la liquidación de los bienes del Consorcio que, en todo caso, se distribuirán en proporción a las aportaciones efectuadas por los entes Consorciados.

Disposición Adicional Única. Aportaciones iniciales de las Partes

Con el fin de asegurar la funcionalidad y garantizar la viabilidad del Consorcio, las entidades fundadoras se comprometen a realizar a su favor las siguientes aportaciones iniciales:

- La Junta de Castilla y León se compromete a aportar un millón (1.000.000 €) de euros de la siguiente forma:
 - Cuatrocientos veinte mil (420.000 €) euros, que se corresponden con los costes por la redacción del Plan Regional de Ordenación de la Ciudad del Medio Ambiente. Dicho coste ya ha sido asumido por la Junta de Castilla y León y se materializará en el referido instrumento de ordenación del territorio.
 - Quinientos ochenta mil (580.000 €) euros mediante aportación dineraria.
- La Diputación Provincial de Soria se compromete a aportar seiscientos mil (600.000 €) euros mediante aportación dineraria.

- El Ayuntamiento de Garray se compromete a aportar los terrenos de su propiedad, situados en el término municipal de Garray, e incluidos dentro del área de actuación, y que han sido valorados en seiscientos mil (600.000 €) euros.

El desembolso de las aportaciones señaladas con anterioridad se realizará de la siguiente forma:

- La aportación de los terrenos por el Ayuntamiento de Garray se realizará de forma íntegra en un plazo máximo de cuatro meses a contar desde el momento de la constitución del Consorcio.

- La aportación del Plan Regional de Ordenación de la Ciudad de Medio Ambiente por la Junta de Castilla y León se realizará en el momento de la constitución del Consorcio.

- En un plazo máximo de cuatro meses desde el momento de la constitución del Consorcio, se aportará al mismo el veinticinco (25 %) por ciento de la cantidad comprometida por la Diputación Provincial de Soria.

- El resto de las cantidades comprometidas se irán desembolsando, de forma proporcional, en la forma que determine la Asamblea General en atención a las necesidades que presente el Consorcio en cada momento.